



SENTENCIA

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Olga Virginia Castaño Garzón
DEMANDADO	Colpensiones
RADICADO	05-001-31-05-018-2020-00275
TEMA	Reajuste y retroactivo pensional
DECISIÓN	Modifica y confirma sentencia

El treinta y uno (31) de enero de dos mil veintitrés (2023), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA** y **GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el ACTA **007** de discusión de proyectos, procede a dictar sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario promovido por **OLGA VIRGINIA CASTAÑO GARZÓN** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-**, con radicado **05-001-31-05-018-2020-00275**.

• **PRETENSIONES:**

La demandante pretende se declare que COLPENSIONES debe reconocer la pensión de vejez a partir del retiro del sistema general de pensiones o a partir de la última cotización, de igual forma, a reajustar el momento porcentual aplicado al IBL obtenido mediante la resolución que reconoció la pensión de vejez, al 78.31% por tener más de 1.866 semanas de cotización.

Como consecuencia, se condene a COLPENSIONES, a pagar el retroactivo pensional, intereses moratorios o en subsidio la indexación, la diferencia del reajustar de la cuantía de la pensión con su indexación y las costas procesales.

• **HECHOS:**

Como fundamentos fácticos de las pretensiones, expresó que presentó solicitud para el reconocimiento pensional ante Colpensiones, el 28 de mayo de 2020. Que nació el 13 de marzo de 1961. Que se le reconoció la pensión de vejez a partir de 1° de julio de 2020, en cuantía de \$4'982.528, con base en 1.866 semanas y un IBL de \$6'486.822, al cual se le aplicó un monto porcentual del 76.81%. Que presentó los recursos de reposición y en subsidio apelación. Que realizó su último aporte al riesgo de pensión en el ciclo 2019-09. Que le fue negado el recurso de reposición. Y que aún no se ha resuelto el recurso de apelación.

- **CONTESTACIÓN:**

- ✓ COLPENSIONES:

Frente a los hechos de la demanda expuso que es cierta la fecha de solicitud de la pensión de vejez si así aparece en el respectivo documento. Que es cierta la edad. Que es cierto el reconocimiento pensional. Que es cierto que interpuso los recursos de ley. Que, frente al retiro del sistema pensional, no obra dicha novedad con el último empleador, por ende, la misma prestación se debe de reconocer a corte de nómina, tal y como se realizó. Que el porcentaje otorgado corresponde a los supuestos fácticos y legales aplicables al caso. Y que es cierto que el recurso de reposición fue negado. Se opuso a la prosperidad de la totalidad de las pretensiones. Y planteó varias excepciones de mérito.

- **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

Mediante sentencia del 10 de agosto de 2022, el Juzgado Decimoctavo Laboral del Circuito de Medellín, **CONDENÓ** a COLPENSIONES a **reliquidar la pensión de vejez de la demandante**, teniendo como IBL el liquidado por COLPENSIONES en el equivalente a \$6'486.822, correspondiente a los últimos 10 años anteriores al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión con una tasa de reemplazo de 78.8% y una primera mesada pensional de **\$5'097.344**.

ORDENÓ a la entidad a reconocer y pagar la suma de **\$11'592.558**, generada por la diferencia entre lo pagado y lo reajustado desde el 1° de octubre de 2019

y hasta el 31 de julio de 2022, suma que deberá ser **indexada**. Y a partir del 1° de agosto de 2022, COLPENSIONES, deberá continuar pagando a la demandante una mesada pensional equivalente a **\$5'678.373** a razón de 13 mesadas anuales, sin perjuicio de los aumentos anuales que el Gobierno Nacional determine.

CONDENÓ a COLPENSIONES a reconocer y pagar a la demandante la suma de **\$49'095.661** a título de retroactivo pensional causado entre el 1° de octubre de 2019 y el 30 de junio de 2020.

AUTORIZÓ los descuentos en salud de los retroactivos reconocidos.

CONDENÓ a COLPENSIONES a reconocer y pagar los **intereses moratorios**, sobre las sumas cuantificadas por **retroactivo** pensional a partir del 28 de septiembre de 2020 a la tasa máxima de interés moratorio vigente a la fecha en que se efectúe el pago.

DECLARÓ improbada la excepción de prescripción.

Y, **CONDENÓ** en costas a COLPENSIONES.

- **CONSULTA:**

Toda vez que ninguna de las partes interpuso recurso de apelación, al ser la sentencia adversa a los intereses de COLPENSIONES, se remitió a este Tribunal para ser revisada en GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA, en lo que respecta a las condenas que le fueron impuestas a la entidad.

- **ALEGATOS:**

- ✓ **COLPENSIONES:**

La entidad a través de su apoderada solicitó sucintamente, revocar la sentencia de primera instancia.

CONSIDERACIONES:

Antes de resolver los problemas jurídicos, se hace necesario hacer un recuento de las pruebas anexadas al plenario por las partes:

- Resolución SUB126931 del 12 de junio de 2020, por medio de la cual, COLPENSIONES, resolvió la solicitud pensional elevada por la demandante, el 28 de mayo de 2020, reconociéndose la prestación económica a partir del **1° de julio de 2020**, en cuantía de \$4'982.528, al aplicar una tasa de reemplazo del 76.81% al IBL de \$6'486.822.¹
- Resolución SUB160906 del 28 de julio de 2020, a través del cual se resolvió el recurso de reposición, en donde se decidió confirmar el acto administrativo SUB126931 del 12 de junio de 2020.²
- Resolución DPE 11637 del 27 de agosto de 2020, en donde COLPENSIONES, resolvió negativamente el recurso de apelación.³
- Planilla de autoliquidación de aportes, del período cotizado de septiembre de 2019.⁴
- Historia laboral anexada por la parte actora, con fecha de actualización del 25 de agosto de 2020.⁵

De acuerdo a lo anterior, los **problemas jurídicos** a revisar en grado jurisdiccional de consulta serán: **i)** la reliquidación de la pensión reconocida por COLPENSIONES, por el reajuste de la tasa de reemplazo y la indexación de dicha condena; **ii)** el retroactivo pensional reconocido junto a los intereses moratorios; y **iii)** a la condena en costas impuesta a Colpensiones.

i. Reliquidación pensión de vejez por el reajuste de la tasa de reemplazo e indexación.

En primer lugar, debe indicarse frente a este tema, que el mismo debe ser analizado en primer orden, toda vez que de existir un reajuste en la tasa de reemplazo y de variar la mesada pensional de la demandante, afectaría la

¹ Folios 17 a 26

² Folios 34 a 43

³ PDF 08

⁴ Folios 44 y 45

⁵ Folios 46 a 60

deflactación que se tendría que realizar en caso de existir el retroactivo pensional solicitado, por lo que se pasará al estudio del reajuste de la tasa de reemplazo.

No se discute que a la demandante le fue reconocida la pensión de vejez a través de la Resolución SUB126931 del 12 de junio de 2020, en cuantía de **\$4'982.528**, para el 1° de julio de 2020, teniendo en cuenta 1.866,⁵⁷ semanas cotizadas, liquidada de conformidad con la ley 797 de 2003.

Esta Sala del Tribunal era del criterio que cuando se superen las 500 semanas adicionales a las 1300, es decir, cuando el afiliado cotice más de 1.800 semanas, el tope de semanas adicionales que se pueden adoptar, no puede superar el **15%**, al señalarse que este valor se extrae de la diferencia que existen entre los montos que trae el artículo 34 de la ley 100 de 1993, ello es, diferencia entre del **65%** al **80%**; sin embargo, se recoge tal postura, basándose en los argumentos que a continuación se exponen y a los señalados en por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL3501-2022.

Y es que, no puede perderse de vista que el artículo 10° de la ley 797 de 2003, el cual modificó el artículo 34 de la ley 100 de 1993, como límite máximo para la tasa de reemplazo solo impuso el 80 %, *“sin indicar rango alguno de oscilación”*. Nótese además que el aparte de dicha norma, que refiere a *“...en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo ...”*, alude a que entre mayor sea el ingreso base de liquidación –IBL, menor será la tasa de reemplazo. Ello obedece a la fórmula $r = 65.5 - 0.5s$, donde se observa que entre más alto sea el IBL, el valor a restar de la fórmula será más elevado, generando como consecuencia una tasa más baja; no obstante, pretender, además de lo ilustrado, que también se deba limitar la tasa de reemplazo en un máximo de 15 %, se tornaría en una decisión que castigue *“...dos veces el monto de la pensión, lo cual no tiene justificación alguna...”*

Pretender entonces limitar la tasa de reemplazo en un máximo de 15 % haría ver que el límite máximo del 80 % de que trata la norma en comento, no tenga utilidad alguna. Ello se debe a que la única persona que aparentemente se vería beneficiada de tal porcentaje sería aquella que cuente con un IBL del salario mínimo legal mensual; sin embargo, atendiendo a lo regulado en el

artículo 14 de la ley 100 de 1993, la pensión no se otorgaría con una tasa del 80 %, sino que se reajustaría al mínimo legal. A continuación, se ilustra lo dicho, teniendo en cuenta el valor del salario mínimo legal mensual vigente para el año 2023, esto es, \$1.160.000.

IBL	r= 65,5 - 0,5s	15% adicional	Tasa de reemplazo	Valor pensión	Reajuste
1	65,00	15	80,00	\$ 928.000	\$ 1.160.000
2	64,50	15	79,50	\$ 1.844.400	
3	64,00	15	79,00	\$ 2.749.200	
4	63,50	15	78,50	\$ 3.642.400	
5	63,00	15	78,00	\$ 4.524.000	
6	62,50	15	77,50	\$ 5.394.000	
7	62,00	15	77,00	\$ 6.252.400	
8	61,50	15	76,50	\$ 7.099.200	
9	61,00	15	76,00	\$ 7.934.400	
10	60,50	15	75,50	\$ 8.758.000	
11	60,00	15	75,00	\$ 9.570.000	
12	59,50	15	74,50	\$ 10.370.400	
13	59,00	15	74,00	\$ 11.159.200	
14	58,50	15	73,50	\$ 11.936.400	
15	58,00	15	73,00	\$ 12.702.000	
16	57,50	15	72,50	\$ 13.456.000	
17	57,00	15	72,00	\$ 14.198.400	
18	56,50	15	71,50	\$ 14.929.200	
19	56,00	15	71,00	\$ 15.648.400	
20	55,50	15	70,50	\$ 16.356.000	
21	55,00	15	70,00	\$ 17.052.000	
22	55,00	15	70,00	\$ 17.864.000	
23	55,00	15	70,00	\$ 18.676.000	
24	55,00	15	70,00	\$ 19.488.000	
25	55,00	15	70,00	\$ 20.300.000	

Asimismo, en la citada sentencia SL3501-2022, frente al límite de la tasa de reemplazo de que trata el artículo 10° de la ley 797 de 2003, señaló:

“Así mismo, la norma también contempla un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% del ingreso base de liquidación, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula indicada, sin embargo, la parte final del mencionado artículo 34 de forma expresa enfatiza en que, “El valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base de liquidación”, pero en este caso, sin indicar rango alguno de oscilación.

Ahora bien, para la Corte lo lógico es, como lo señaló el legislador, calcular el monto inicial de la pensión conforme a la tasa de reemplazo variable en función del nivel de ingresos de cotización, de suerte que, el monto máximo es directamente proporcional al número de cotizaciones adicionales a las mínimas requeridas, es decir, la tasa de reemplazo pende del nivel de ingresos del afiliado y del monto máximo del número de semanas cotizadas; no obstante, las cotizaciones efectuadas a partir del porcentaje máximo del 80% no se computan, ni procede su devolución, en virtud del principio de solidaridad, expresado en ese tope porcentual

sobre el límite de salarios mínimos a los que puede llegar el monto de la prestación pensional otorgada por el Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, con las reformas y adiciones legales ya enunciadas.

En efecto, la fórmula decreciente estableció que para determinar la tasa de reemplazo se resta a 65.50 los salarios mínimos contenidos en el IBL en cada caso, por tanto, si se vuelve a utilizar ésta para calcular el monto máximo de la pensión, se estaría tomando el nivel de ingresos de cotización para disminuir o castigar dos veces el monto de la pensión, lo cual no tiene justificación alguna, pues con la fórmula se pretende desincentivar el aumento injustificado del ingreso base de cotización, pero en manera alguna limitar el número de semanas necesario para alcanzar el monto máximo de la pensión establecido por la misma norma, salvo la del tope legal ahora vigente de 25 SMMLV.

(...)

Por otro lado, nótese que el incremento de la tasa de reemplazo en un 1.5% del ingreso base de liquidación, por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas, corresponde a una forma de estimular el trabajo productivo, como valor fundante del Estado Social de Derecho, dado que el trabajo “es ciertamente un derecho humano (Artículo 25) pero también constituye, al mismo nivel del respeto o la dignidad humana, un principio o elemento fundamental del nuevo orden estatal. Cuando el Constituyente de 1991 decidió garantizar un orden político, económico y social justo e hizo del trabajo requisito indispensable del Estado, quiso significar con ello que la materia laboral, en sus diversas manifestaciones, no puede estar ausente de la construcción de la nueva legalidad” (CC C-542-1992).

(...)

Ahora, desde la perspectiva de la regulación de la pensión de vejez, la concepción de la idea se basa en que el monto máximo porcentual de la prestación puede ser limitado en un régimen de aseguramiento social, como lo es el contemplado por el Título II, Capítulo I, de la Ley 100 de 1993, definido como un régimen solidario de prestación definida, en el cual los afiliados de mayores ingresos se solidarizan con aquellos de ingresos menores, a través de las aportaciones que realizan en un fondo común de naturaleza pública para garantizar el pago de las pensiones, señalando los montos mínimos y máximos para su reconocimiento, para lo cual el legislador estableció varios mecanismos con la finalidad de evitar pensiones excesivas que puedan poner en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema y, de esta manera, contribuir a la búsqueda de la realización de la solidaridad como principio fundamental de la seguridad social contenido en el artículo 48 Constitución Política que, a su vez, fue desarrollado por el literal c) del artículo 2 de la Ley 100 de 1993, al definirlo como: “la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio del más fuerte hacia el más débil.

(...)

Lo anterior denota la voluntad del legislador por imponer una mayor base de cotización para los ingresos más altos, pero restringiendo el límite máximo de la pensión a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes con el fin de evitar desigualdades e inequidades en el reconocimiento de las pensiones que, a su vez, puedan afectar la viabilidad del sistema.

Como quedó visto, la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003 y el Acto Legislativo 01 de 2005, adoptaron unas reglas con el propósito de evitar distorsiones en el monto de las pensiones que reconoce el régimen de prima media con prestación definida, así: i) una tasa de reemplazo para la pensión de vejez calculada con una fórmula decreciente en función del nivel de ingresos de cotización; ii) un incremento del monto de la pensión en función del número de semanas cotizadas, adicionales a las mínimas requeridas; iii) un monto máximo de la pensión de vejez, que no podrá ser superior al 80% del ingreso base de liquidación; iv) un límite a la base de cotización de 25 salarios mínimos legales, sin perjuicio del aumento hasta de 45 smlmv; y v) la prohibición de pensiones superiores a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”

Ahora, descendiendo al caso concreto, es importante indicar que el problema jurídico planteado se resuelve acudiendo a la normativa general del artículo 34 de la ley 100 de 1993, modificada por el artículo 10 de la ley 797 de 2003, el cual señala que la tasa de reemplazo corresponde al aplicar la formula $R=65.5-0.5(s)$.

Para un mayor análisis, debe explicarse cómo se despeja la fórmula planteada, debiéndose entender que “s” es el número de salario mínimos para el año 2019 (\$828.116), fecha en que se efectuó la última cotización reuniendo la totalidad de requisitos para dicha fecha, que caben en el IBL (\$6'486.822, liquidado por COLPENSIONES y que no presenta inconformidad alguna), lo cual arroja un resultado de 7.83, que en principio da una tasa de reemplazo del **61.59%**.

$$R=65.5 - 0.50 (\$6'486.822/\$828.116)$$

$$R= 65.5 - (0.5 * 7.83)$$

$$R= 65.5 - 3.91$$

$$R= \mathbf{61.59\%}$$

No se puede para por alto que la norma en comento dispone, que *“A partir del 2005, por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo. El valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima.”*

Teniendo en cuenta lo anterior, la norma da posibilidad de incrementar ese porcentaje, por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas en un 1.5%, como efectivamente lo expone la parte actora.

Así pues, en el presente caso, para el año 2019, las semanas mínimas requeridas eran 1.300, y la demandante cotizó un total de 1.866,⁵⁷ semanas, lo que equivalen a **566.57 semanas adicionales**; y si dividimos las 566.⁵⁷ semanas adicionales entre 50, dan un total de 11⁶, que multiplicado por 1.5% arroja un **16.50%**.

⁶ Debe ser un número entero y no 11.33% como expresó la juez, por lo que no debería arrojar 16.99% sino 16.50%

En este sentido, se podría decir que la tasa de reemplazo sería: **61.59%** (resultado que nos dio la fórmula) + **16.50%** (resultado de las semanas adicionales), dando finalmente un monto porcentual **78.08%**, y no del 78.58% como lo expresó la juez, toda vez que esta erró al realizar las operaciones aritméticas del caso⁷.

De acuerdo a lo anterior, esta Sala procedió a verificar la reliquidación realizada por el juzgado de primera instancia, y constató que efectivamente existen errores en las operaciones, por lo que al aplicar realmente una tasa de reemplazo del 78.09%, arrojaría una mesada pensional para el año 2019 de **\$5'064.911**, y no de \$5'097.344, como lo expresó la juez, lo que generó que la pensión fuera mucho más elevada de lo que debió ser en realidad, no obstante, si es procedente la reliquidación pretendida, pero no en los términos indicados en primera instancia.

En lo términos señalados, se **MODIFICARÁ** la sentencia de instancia, en el sentido que la mesada pensional causada para el año 2019 es de **\$5'064.911**; así las cosas, por concepto de retroactivo de la reliquidación de la pensión de vejez causado del 1° de julio de 2020 al 31 de julio de 2022 (fecha dada por la juez) se adeuda la suma de **\$7'619.309** y no de \$11'592.558, liquidada a razón de 13 mesadas al año, teniendo en cuenta que la prestación se causó con posterioridad al 31 de julio de 2011, viéndose afectada por lo establecido en el inciso 8° del acto legislativo 01 de 2005.

Debe indicarse que la juez cometió un error al reajustar las mesadas desde el 1° octubre de 2019, toda vez que COLPENSIONES, solo vino a reconocer la prestación desde el 1° de julio de 2020, debiéndose hacer claridad, que **una cosa es el estudio del reajuste de las mesadas ya reconocidas** por la entidad accionada, **y otra, las mesadas faltantes, las cuales se otorgan a título de retroactivo pensional** después de realizar una correcta liquidación de la mesada pensional.

REAJUSTE PENSIONAL

⁷ Dividió \$6'486.822/\$828.116, arrojando 7.83, que al ser multiplicado por 0.5, le dio 3.91, y al continuar con la operación le dio un total de 61.59%. Y por cada 50 semanas adicionales a las requeridas le totalizó 11,33 que al ser multiplicado por 1,5, dio 16.99%; y expresó que este resultado más **61.69%**, dio un total de **\$78.58%**, no obstante, en la parte resolutive, es decir en la tabla de liquidación se observa que tomó **78.8%**.

Año	Valor reconocido	Valor real	Diferencia mensual	# mesadas	Total retroactivo
2020	\$ 4.982.528	\$ 5.257.378	\$ 274.850	7	\$ 1.923.947
2021	\$ 5.062.747	\$ 5.342.021	\$ 279.275	13	\$ 3.630.571
2022	\$ 5.347.273	\$ 5.642.243	\$ 294.970	7	\$ 2.064.790
				TOTAL	\$ 7.619.309

De igual forma, **COLPENSIONES** deberá continuar pagando a partir del 1° de agosto de 2022, una mesada por valor de **\$5'642.243**, y no de \$5'678.373, debiéndose reajustar las demás mesadas pensionales ya reconocidas.

Por otro lado, cabe recordar que, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 143 de la ley 100 de 1993, la cotización para salud de los pensionados, quienes son afiliados obligatorios a este sistema en el régimen contributivo, se encuentra en su totalidad a cargo de aquéllos. Y es por ello, que el pensionado está en la obligación de realizar los aportes a salud desde el momento mismo en que ostenta el estatus de pensionado, siendo esta una disposición inherente al otorgamiento de la pensión y legalmente obligatoria, tal y como lo ha advertido la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencias SL-1981 de 2021, SL2609-2021 y SL1784-2022.

Por tal razón, se **CONFIRMARÁ** la autorización dada por la juez a **COLPENSIONES**, para que realice los respectivos descuentos en salud sobre las mesadas pensionales ordinarias reconocidas.

En lo que respecta a la **indexación**, la misma solo procede sobre la diferencia pensional reconocida, toda vez que es indudable la pérdida del poder adquisitivo del peso colombiano, pues cuando un pago no se hace en la fecha de su exigibilidad el mismo comienza a depreciarse y la indexación o revaluación judicial es el mecanismo apropiado para combatir ese defecto. En virtud de lo anterior, es procedente la condena al reconocimiento de la indexación, en el sentido de ordenar a la entidad demandada a indexar todas las sumas adeudadas por concepto de reajuste de la pensión de vejez, tomando para ello el valor del IPC certificado por el DANE, entre la causación de cada mesada y hasta el momento efectivo del pago, por lo que la sentencia en tal sentido será **MODIFICADA**, en el sentido de **CONDENAR** a COLPENSIONES, a cancelar la indexación del reajuste desde el 1° de julio de 2020 y hasta el momento efectivo del pago de dicho concepto.

ii. Retroactivo pensional e intereses moratorios.

En lo que tiene que ver con el reconocimiento del retroactivo, lo primero que es necesario advertir es que éste se comienza a cancelar y disfrutar una vez se acredite la desafiliación o retiro del sistema, como claramente lo señala el artículo 13 del Decreto 758 de 1990, normatividad que no ha perdido vigencia con el establecimiento del Sistema General de Pensiones, puesto que esta normatividad no reguló lo relativo al retiro al sistema de pensiones, siendo aplicable en ese caso el artículo 31 de la Ley 100 de 1993.

En ese orden debe decirse que en efecto el artículo 13, que se complementa con el 35 del Decreto 758 de 1990, prescribe que para disfrutar de la pensión de vejez es necesario el retiro del sistema, estableciendo una diferencia entre los fenómenos de causación- entendido como el momento en que se adquiere el status de pensionado por cumplir con las condiciones de edad y cotizaciones, y el disfrute, que implica recibir la mesada pensional.

En este punto debe indicarse que al retiro del sistema de pensiones puede llegarse por dos vías, la primera a través de un asentamiento formal de la novedad realizado por el cotizante a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aporte –PILA- y la segunda, que surge de la expresión del afiliado y de los actos tendientes a disfrutar de la prestación, la que se concreta en hechos como el cese de las cotizaciones y el concomitante reclamo de la pensión por parte del afiliado.

A esta segunda modalidad se le ha denominado *desafiliación tácita*, y respecto de la misma se ha pronunciado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, explicando en su precedente que debe dársele relevancia a las actuaciones realizadas por el afiliado para disfrutar de su derecho pensional derivando de estas la existencia de una voluntad de retiro. En este sentido es importa hacer mención de lo enseñado en la Sentencia SL-5541 de 2019, en la que al respecto se dijo:

“Sobre la figura de la desafiliación, esta Sala ha considerado que aquella acontece cuando el afiliado exterioriza su voluntad de no continuar amparado para los riesgos IVM en el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, manifestación que bien puede ser expresa, reportando la novedad de retiro, o tácita, mediante actos que así lo den a entender. En

esa medida, sobre el alcance y sentido de los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, la Sala ha adoctrinado que cuando no se cuente con el acto formal de desafiliación, deben examinarse las circunstancias fácticas del caso a fin de determinar en qué momento debe entenderse que el afiliado desiste de su afiliación al sistema pensional y se hace exigible la mesada causada, pues cabe recordar que la novedad de retiro tiene una doble connotación, ya que puede significar la desafiliación del sistema o la terminación del vínculo, puesto que los empleadores al momento de finalizar la relación contractual deben diligenciar la novedad de retiro, y no puede desconocerse que el trabajador puede continuar haciendo aportes por medio de otro empleador o de forma independiente, y por lo tanto, si una vez reportada tal novedad se continúa realizando aportes por medio de otro empleador, la novedad debe entenderse como cambio de empleador o terminación del vínculo contractual, mientras que si se deja de efectuar cotizaciones al sistema, se debe entender es el retiro del sistema.”

Conforme a lo anterior, se tiene que la señora CASTAÑO GARZÓN, acreditó el requisito de la edad, es decir, cumplió los 57 años de edad, el 13 de marzo de 2018, realizando su última cotización al sistema pensional el 30 de septiembre de 2019, por lo que en principio debe entenderse que sería desde allí la aplicación de la figura del retiro tácito del sistema pensional, toda vez que la actora elevó solicitud para el reconocimiento de la pensión el 28 de mayo de 2020, debiendo ser reconocidas la mesadas pensionales a partir del **1° de octubre de 2019**, y hasta el 30 de junio de 2020 que comenzó a cancelar la pensión de vejez COLPENSIONES, como correctamente se expuso en la sentencia de primera instancia.

Una vez revisada la liquidación efectuada por el juzgado, comprendida entre el 1° de octubre de 2019 al 30 de junio de 2020, encuentra la Sala que existe un error en la liquidación de la misma, toda vez que la juez tomó el valor de la mesada para el año 2019 (\$4'800.123), sin realizar el respectivo reajuste de la tasa de reemplazo (tema analizado en el primer acápite), y, por ende, modificaría la mesada pensional, la cual es de valor \$5'064.911; así las cosas, una vez efectuado los cálculos pertinentes, el retroactivo pensional adeudado sería de valor de **\$51'803.910**, y no de \$49'095.661, sin embargo, al ser la sentencia revisada en grado jurisdiccional de consulta en favor de COLPENSIONES, **no podrá existir reforma en peor**, por lo que se **CONFIRMARÁ** la condena de la primera instancia en tal sentido.

RETROACTIVO PENSIONAL			
Año	# mesadas	Valor pensión	Total Retroactivo

2019	4	\$ 5.064.911	\$ 20.259.644
2020	6	\$ 5.257.378	\$ 31.544.266
		TOTAL	\$ 51.803.910

En lo que respecta a los **intereses moratorios**, es válido recordar que estos fueron creados por la ley 100 de 1993, para resarcir el retardo de la entidad de seguridad social que estando obligada al pago de las mesadas pensionales de que trata dicha ley, no las cancele de manera oportuna. Así lo prevé el artículo 141 de la ley 100.

En este orden de ideas, la mora de la entidad sólo opera luego de pasados cuatro meses de radicada la solicitud de reconocimiento pensional, con el lleno de los requisitos, como lo indica el artículo 9° de la Ley 797 de 2003, lo cual es apenas lógico, puesto que la entidad, dentro de tal plazo y una vez presentada la solicitud de la pensión por parte del afiliado, previo al reconocimiento del derecho, debe entrar a corroborar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por la normatividad aplicable.

En el presente caso, la actora solicitó la pensión el 28 de mayo de 2020, por lo que desde esta fecha COLPENSIONES tenía 4 meses para el reconocimiento del derecho, lo cual no realizó, por tanto, la accionada incurrió en mora en el pago de las mesadas pensionales adeudadas a la demandante a partir del **28 de septiembre de 2020**, por tal razón, los intereses moratorios se deberán cancelarse desde la última fecha dada, hasta que se cancele la obligación impuesta por retroactivo pensional. Debiéndose en este sentido, **CONFIRMAR** la condena impuesta por la juez.

iii. Costas procesales.

En lo que tiene que ver con la **condena en costas** a la demandada, nuestra ley procesal, ha consagrado en esta materia el criterio objetivo, es decir, que las costas corren en todo caso a cargo del vencido en juicio, sin que sea admisible tener en consideración la conducta asumida por las partes dentro del mismo, es decir, sin considerar si se actuó o no de buena fe, ya que sólo basta con el hecho de haber resultado vencido en juicio para que se imponga tal condena. Por esta razón, es que COLPENSIONES, debe asumir las costas procesales tal y como lo expresó la juez de primera instancia.

Con los argumentos anteriores y atendiendo al principio de consonancia de que trata el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, esta Sala hizo un pronunciamiento implícito de las alegaciones presentadas.

Las costas procesales de la primera instancia quedan como lo dijo la juez. En la segunda instancia no se causaron.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE:

PRIMERO: Se **MODIFICA** la sentencia de primera instancia que se revisa por vía de consulta, y en su lugar se **CONDENA a COLPENSIONES** a reconocer y pagar por concepto de **retroactivo del reajuste pensional** la suma de **\$7'619.309** y no de \$11'592.558, del 1° de julio de 2020 al 31 de julio de 2022 (fecha dada por la juez), conforme a los cálculos realizados en la parte motiva de la providencia.

SEGUNDO: Se **ORDENA a COLPENSIONES**, seguir reconociendo a partir del **1° agosto de 2022**, una mesada pensional por valor de **\$5'642.243**, conforme se indicó en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: Se **MODIFICA** la sentencia en lo que respecta a la **indexación de la condena por reajuste pensional**, y en su lugar se **CONDENA a COLPENSIONES**, a cancelar la indexación desde el **1° de julio de 2020** y hasta el momento efectivo del pago de dicho concepto.

CUARTO: En lo demás se **CONFIRMA** la sentencia.

QUINTO: Las costas procesales quedan como se dejó dicho en la motivación de esta providencia.

Se notifica lo resuelto por **EDICTO**. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ


CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Olga Virginia Castaño Garzón
DEMANDADO	Colpensiones
RADICADO	05-001-31-05-018-2020-00275
DECISIÓN	Modifica y confirma sentencia
MAGISTRADO PONENTE	Guillermo Cardona Martínez

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN
Fijado el 1° de febrero de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Se desfija el 1° de febrero de 2023 a la 5:00pm


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO